

L a CNTE. El fin de una época

Rogelio Sosa*

La CNTE ha cubierto un amplio periodo histórico en sucesivas oleadas de lucha convirtiéndose, en varias etapas de sus veinte años de vida, en la principal referencia de la lucha social en México. Las causas que le dieron vida no sólo siguen vigentes, sino que en el marco de las políticas neoliberales se han hecho cada vez más patentes y ominosas. Ello evidencia la presumible permanencia de la insurgencia magisterial si, como se advierte, con el próximo gobierno de Fox se sigue desarrollando la misma política hacia los trabajadores y hacia el sector educativo. La existencia de la insurgencia magisterial, sin embargo, no es garantía de mejoramiento de las condiciones de ingreso y de trabajo para el gremio ni de cambios progresistas en la materia de trabajo del mismo, la cual concierne a toda la sociedad. Para avanzar en esa dirección, tendrán que operarse cambios sustantivos en las estrategias, tácticas y relaciones políticas de los grupos magisteriales que tienen la hegemonía al interior de la CNTE.

Los vertiginosos cambios sociales operados en México y en el mundo en los últimos veinte años, han transformado de manera muy significativa, entre otros sujetos, a las organizaciones sociales independientes que nacieron, en nuestro país, como expresión orgánica de la respuesta de amplios segmentos de la sociedad golpeados por los efectos de la crisis económica y las políticas con las que el Estado y los grupos hegemónicos reaccionaron ante ella.

Las organizaciones sectoriales de masas que surgieron en aquel entonces como "coordinadoras" de amplios movimientos insurgentes, evolucionaron rápidamente hacia procesos de desintegración o de una drástica

reducción de su dimensión y papel político. La Coordinadora Sindical Nacional (Cosina) fue la primera en sucumbir ante las contradicciones internas entre los grupos de izquierda que actuaban en las zonas fabriles del centro del país y que eran su soporte ideológico, político y operativo. En ello influyó también de manera importante la dura represión orquestada por la trilogía Estado-charros-patronos. La acción punitiva de éstos se dejó sentir, sobre todo, como reacción a las amplias jornadas de lucha articuladas por la Asamblea Nacional Obrero-Campesino-Popular (verdadera coordinadora de coordinadoras) en el año 1983 y particularmente por la demostración de la fuerza insurgente desplegada en las huelgas de junio de ese año, en las cuales tuvieron participación incluso sectores obreros de los sindi-

* Dirigente de la CNTE.

catos charros. El riesgo de un desbordamiento social de amplia magnitud fue real y en esa proporción fue la reacción de un régimen que había pasado por la profunda experiencia del movimiento estudiantil y social de 1968. De hecho, la inmensa mayoría de los dirigentes de las coordinadoras de los ochenta eran veteranos del movimiento estudiantil.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), aunque subsiste hasta la fecha, experimentó diversas fracturas a través de estas dos décadas y carece de la fuerza y capacidad de acción y convocatoria de su primer periodo. Igual saldo ofrece la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano-Popular (Conamup), matriz de la mayor parte de los movimientos de colonos y sectores urbanos que se han organizado al margen de ella en este periodo a lo largo y ancho del país, y que se muestran, sin embargo, incapaces de recuperar la unidad de acción que favoreció esa Coordinadora en sus primeros años.

En relación con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), encontramos en ella un proceso inédito en la historia del país, porque su actuación se ha prolongado con una fuerza y significación política no desarrolladas por ninguna otra organización social. Su incidencia en el mayor sindicato de América Latina, la magnitud de sus movilizaciones, su capacidad de presión y negociación en ciertas coyunturas y para convocar y aglutinar a otras fuerzas insurgentes, la convirtieron en una referencia importante de la resistencia social durante la década de los ochenta en la que se inauguraron y desarrollaron las políticas neoliberales del régimen.

De hecho, después de la dura represión del gobierno y de los empresarios apoyados por el charrismo, sobrevino un período de desarticulación del movimiento insurgente. La CNTE fue en ese período (1984-1988), junto con un fuerte aunque disgregado movimiento urbano, principal referente de la resistencia social. En esta etapa destaca el surgimiento de diversas organizaciones de colonos y damnificados por los sismos de 1985; las huelgas del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y del Sindicato Mexicano de Electricistas, (SME) así como aislados movimientos obreros (La Favorita, Pascual) y campesinos del sur-sureste. La



FOTO: ESFERA

mayoría de estas experiencias lograron sus objetivos de resistencia y en muchos de esos casos la CNTE cumplió un papel importante de apoyo político y logístico, lo mismo como instancia nacional, que a través de sus contingentes, especialmente las secciones XXII de Oaxaca y la VII de Chiapas.

La coyuntura electoral de julio de 1988 expresó la inconformidad acumulada después de un sexenio de políticas regresivas para las mayorías. La derrota, no reconocida, del partido oficial mediante un amplio frente opositor permeado por la izquierda, fue también producto de largos años de lucha social con incidencia importante del magisterio democrático. Este, a su vez, fue influenciado en gran medida por la insurgencia electoral de 1988. A partir de esa coyuntura, la participación en las elecciones se convirtió en un punto central del debate político entre las corrientes participantes en la Coordinadora. Crecientes segmentos del magisterio se fueron comprometiendo con la participación político-electoral, especialmente en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En una visión de largo plazo, es posible identificar a la CNTE como a uno de los hilos

conductores más fuertes de conexión del Movimiento Estudiantil de 1968 con la lucha social de los ochenta. Debido a ello, el régimen, en los primeros años de la Coordinadora, con anuencia de la dirección oficialista del SNTE (en manos de Vanguardia Revolucionaria) aplicó la represión contra el movimiento y el asesinato contra dirigentes y activistas, como sucedió principalmente en los casos del Valle de México, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas.

Sin embargo, como se ha apuntado, el movimiento se sostuvo especialmente con la lucha prácticamente ininterrumpida de Oaxaca y, en menor grado, de Chiapas, hasta llegar a la movilización magisterial de 1989, la cual dejó un precedente histórico, no sólo por su magnitud (más de 500,000 trabajadores de la mayoría de las secciones del SNTE) sino también por sus logros. Se rompió el tope del 10% impuesto por Salinas al aumento salarial, para alcanzar el 25%; se logró la conquista de los comités ejecutivos seccionales de Oaxaca, Chiapas y la estratégica Sección IX del Distrito Federal, así como significativos avances en Guerrero, Michoacán y otros estados.

Sin embargo, después de los triunfos de 1989, Elba Esther Gordillo, quien relevó a Carlos Jonguitud Barrios y dismanteló a su corriente Vanguardia Revolucionaria, promovió la táctica de incorporar como cabeza del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, a cuadros formados en la Coordinadora, con el fin de asimilar este movimiento al control oficial. No logró su objetivo, la concertación no se realizó con los contingentes en lucha (éstos fueron y son refractarios a tal política) sino con personas o pequeños grupos desplazados de la conducción de la Coordinadora.

La estrategia de fondo que aplicó el gobierno de Salinas ante los fuertes obstáculos que representaba la Coordinadora para la aplicación del modelo neoliberal en el terreno laboral y ante la intrínseca fuerza potencial del SNTE, fue su desmembramiento mediante la descentralización educativa, establecida en el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa (ANMEB) de mayo de 1992. Ello fue posible dada la victoria electoral del partido oficial en 1991 y la notable recuperación política del propio Salinas. También en ese marco,

reformó el Artículo 3º constitucional y expidió la Ley General de Educación en 1993.

¿Por qué después de la exitosa movilización magisterial de 1989 no fue posible que la CNTE fuera capaz de frenar o revertir la contraofensiva salinista de los años siguientes?

Se debería considerar que la gran oleada del movimiento magisterial de la primavera de 1989 no fue preparada u organizada anticipadamente. Tuvo, por el contrario, un alto grado de espontaneidad. Si bien la convocatoria surgió de la discusión y acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa, máxima instancia de acuerdos de la Coordinadora, ello fue un detonante que desencadenó la incorporación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación a partir de la acumulación durante varios lustros de inconformidad laboral producida por la agresiva política salarial del régimen. Evidentemente, el papel colaboracionista de la dirección sindical nacional con la aplicación de tal política, lo puso en el centro de la confrontación: de ahí la relevancia que tuvo la demanda de democracia sindical en esa coyuntura.

La naturaleza espontánea y la extensión de la movilización de la primavera de 1989 expresó nítidamente el comportamiento de la Coordinadora desde su nacimiento. Es decir, demostró sus alcances y límites políticos. Se trata de un ente no articulado orgánicamente que se constituye como frente coyuntural a partir de acuerdos de lucha generados por los contingentes que le dan vida. Entonces, es en éstos donde se encuentran tales alcances y límites. Conocedor de esto, el gobierno de Salinas consumó el proyecto descentralizador buscando imponer una lógica de expresión y solución local de los problemas magisteriales para derivar de ahí, la disolución progresiva de la fuerza disidente y de sus articulaciones nacionales.

La estrategia dio resultados positivos al gobierno porque el fuerte desgaste de los contingentes más destacados de la CNTE (en el periodo 1991-1994, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) en medio del reflujo general, impidió que la Coordinadora lograra neutralizar o siquiera condicionar las regresivas reformas y acciones educativas de Salinas. El período

señalado se caracterizó también por el exacerbamiento de las contradicciones entre las corrientes y grupos al interior de la Coordinadora. En Michoacán y en Guerrero, por ejemplo, se dividió el magisterio formándose grupos dentro del movimiento democrático que reclamaban la representación seccional.

Durante el gobierno de Zedillo, y como consecuencia de la grave crisis económica que se desarrolló durante 1995, el magisterio emprendió nuevas luchas. Oaxaca, Guerrero y Michoacán se mantuvieron a la cabeza de las acciones nacionales que se han sostenido anualmente hasta la fecha.

La característica de este período fue el despliegue de la lucha de contingentes no incorporados a la CNTE, como fueron los casos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Este factor —la falta de crecimiento de la Coordinadora en el resto del país y el renovado conflicto interno— indica los límites históricos del proyecto. Se puede decir que quienes lo sostienen son, por un lado, importantes contingentes magisteriales como el de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otros de menor magnitud con una cultura democrática y de lucha sedimentada en los veinte años de existencia de la CNTE (el último de los mencionados, a partir de 1989) por el otro lado, animan y justifican con creces la lucha magisterial las agresivas políticas gubernamentales que han expropiado el salario real del magisterio y, además, han dado plena cobertura a los dirigentes charros del SNTE.

Los últimos años de lucha de la Coordinadora, han mostrado el agotamiento del modelo de lucha basado en oleadas de movilización, cuyo objetivo principal estaba centrado en la lucha por el aumento salarial y la democracia sindical. Sin embargo, al no lograr la necesaria acumulación de fuerza para conquistar aumentos salariales mayores a los pactados entre el Gobierno y los charros del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y ni siquiera la realización con negociaciones verdaderamente nacionales, como en otros tiempos, sino culminar las jornadas de lucha en negociaciones diferenciadas por estados, la CNTE pierde gran parte de su capacidad de convocatoria y el aglutinamiento de la inconformidad del magisterio nacional.

La demanda fundamental por la democracia sindical ha perdido gran terreno también debido a que el charrismo ha logrado assimilar la existencia de las secciones y demás contingentes democráticos en la lógica de concertar y neutralizar a la oposición, tal como lo practica el régimen en el ámbito más general. Pero, además, el charrismo ha aprendido a mediatizar la acción crítica de los individuos y grupos que lo cuestionan al interior de las secciones bajo su control. Un factor coadyuvante en este proceso ha sido, sin duda, la mayor legitimidad que ha alcanzado el charrismo en diversas secciones en las que operan grupos de activistas y dirigentes de la disidencia incorporada al Comité Ejecutivo Nacional como son los casos de Fracciones Democráticas del SNTE y Nuevo Sindicalismo. Con dichas corrientes, existe un alto grado de tolerancia y acuerdo por parte del charrismo para construir una imagen de pluralidad y democracia que conjure la crítica y el accionar de los grupos disidentes radicales y/o afines a la Coordinadora.

Salvo el reciente caso de Tabasco, donde se presentó nuevamente un proceso de confrontación de la base magisterial con la dirección seccional controlada por el charrismo (en el marco de la lucha por el aumento salarial), la tónica de los últimos años ha sido de un amplio control y mediatización del mismo sobre los brotes de inconformidad en contingentes no incorporados a la CNTE. Por ejemplo, el régimen se empleó a fondo para aislar la inconformidad magisterial aun otorgando concesiones económicas mayores a las ofrecidas a contingentes de la CNTE. Ese afán gubernamental, en vísperas de las elecciones del 2 de julio de este año y la falta de sincronización del movimiento respecto a los contingentes de la CNTE, derivó en un desenlace similar a los movimientos estatales que se desplegaron al margen de la Coordinadora en años anteriores.

Para comprender los límites que ha alcanzado el proyecto de la CNTE, es necesario tomar en cuenta el fuerte desgaste operado en su desarrollo interno a raíz de una propensión de los grupos dirigentes a la confrontación ideológica, al estilo de los años setenta. Es conocida la secuela de contradicciones internas que ha afectado a la Coordinadora desde su fundación. La priorización de la confrontación

ideológica y el dominio de la desconfianza política intergrupal limitaron la búsqueda de acuerdos estratégicos que le permitieran a la CNTE rebasar el carácter de frente circunstancial para constituirse en una corriente suficientemente definida en términos programáticos y orgánicos para disputarle al charrismo la dirección nacional del SNTE. En lugar de ello, prevalecieron, hasta el presente y en una gran medida, la intolerancia, el sectarismo, el mesianismo, la improvisación y los intentos de algunos grupos por liquidarla en favor de proyectos unilateral y cupularmente diseñados. Sólo el empuje reiterado de las bases trabajadoras ha forzado a los grupos de dirección a tolerarse mutuamente, aunque sea de manera transitoria, en el marco del ascenso de la movilización.

Un factor que alimentó siempre la confrontación y desconfianza entre los grupos de mayor incidencia en la CNTE, fue la persistente campaña de cooptación, exitosa en ocasiones, desplegada por el charrismo. La relación con éste y con el régimen en general fue de carácter reactivo, más que de una confrontación de proyectos y propuestas frente a la base trabajadora.

Una materia fundamental que ha quedado pendiente para la CNTE y que le ha significado un alto costo político, es el fuerte rezago en la construcción de un proyecto alternativo de educación. Desde su nacimiento, diversos contingentes y grupos de la Coordinadora impulsaron la realización de diversos foros y eventos de educación alternativa, sin embargo, fue hasta 1991 cuando se realizó el I Congreso Nacional de Educación Alternativa que le permitió definir a la CNTE los lineamientos de tal proyecto. No obstante los esfuerzos desplegados por activistas y grupos de dirección de diversos contingentes, la iniciativa quedó en el papel y ni siquiera la mayoría de los participantes de base conocieron y discutieron tales propuestas; menos lo hicieron otros actores involucrados, como los padres de familia.

El costo político que el rezago en este campo pagó la CNTE se puede estimar si se considera que la materia de trabajo del magisterio es un importante puente natural que lo une a nivel político y social con la población. El te-

rreno laboral y sindical no es suficiente motivo para concitar la participación y el apoyo consistente de la población y especialmente de los padres de familia hacia las luchas magisteriales. El gobierno de Salinas enfrentó esta situación llenando el amplio vacío dejado por el magisterio democrático, incluyendo en la Ley General de Educación promulgada en 1993 los llamados *consejos de participación social*, mediante los cuales se asigna un papel diferenciado y eventualmente conflictivo a los sectores organizados de la sociedad y, entre ellos, a los padres de familia frente a los maestros, en la célula básica de la relación escuela comunidad, que debiera ser el espacio vital y fundamental de la alianza magisterial y popular.

No han sido suficientes los innumerables eventos de discusión realizados por la CNTE respecto a la construcción de un proyecto educativo democrático, porque al no existir un movimiento pedagógico continuo de reflexión y acción para el cambio a nivel de las escuelas, los eventos se convierten en actos rituales de crítica al sistema educativo vigente, pero sin incidir en las mayorías, quienes son las grandes ausentes. Por ello, no es extraño encontrar a segmentos del magisterio democrático que viven la contradicción de ser, en las calles, heraldos del cambio social y de la lucha por la democracia, en sus aulas, practicantes de una docencia tradicional, acrítica y verticalista. Tampoco es extraño que muchos maestros democráticos no sólo mantengan cierta distancia con los padres de familia de sus alumnos, sino que no muestren mucho interés en compartir con ellos la tarea educativa.

Los padres de familia son cada vez más espectadores que actores que compartan los ideales y las luchas magisteriales, no obstante que las demandas de aumento salarial, democracia sindical y una nueva educación están directamente ligadas a sus intereses inmediatos y de largo plazo.

La jornada de lucha del 2000

La jornada nacional de lucha de la CNTE de este año, fue una reedición más del modelo de lucha anotado más arriba. En ella, se expresaron las contradicciones, las carencias y

el desgaste ya señalados. En esta ocasión, la coyuntura electoral fue un factor importante que definió el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos.

En general, la preparación de los contingentes fue deficiente. Salvo el caso de Oaxaca, cuya sección se ha caracterizado por la realización de sistemáticas consultas a nivel de las delegaciones sindicales para decidir en las bases trabajadoras tanto las demandas a levantar como las estrategias de lucha y el plan de acción a seguir, en la mayoría de los contingentes esto no se realizó. En otros lo frecuente, como en esta ocasión, es que los grupos de dirección deciden después de un análisis político de la coyuntura si se debe impulsar o no determinado pliego de demandas y cierto plan de acción que puede incluir un paro indefinido de labores. En lo general, este método deja en la pasividad a miles de trabajadores que se ven presionados por esquemas ya resueltos de lucha. Los resultados han estado a la vista de todos y se expresa en una sustancialmente menor participación del magisterio convocado.

Las experiencias de las jornadas nacionales de lucha de la CNTE con las deficiencias ya señaladas, se reeditaron en este año con fuertes desventajas adicionales. Igual que en el caso de la UNAM, el régimen de Zedillo buscó afanosamente enfrentar al movimiento magisterial con el gobierno perredista de la Ciudad de México. El gobierno federal utilizó abiertamente la lucha de los maestros para demostrar la incapacidad política del gobierno local con el argumento de que las soluciones a los distintos contingentes se encontraban en sus respectivas entidades. Esto, evidentemente, pretendía ignorar que el financiamiento de la educación y por tanto, el salario del magisterio se resuelve centralmente y los gobiernos estatales dependen de la decisión federal, lo que es aún definitivo sobre todo en los estados en los que principalmente operan las fuerzas de la CNTE y que carecen prácticamente de ingresos propios significativos para el sector educativo. Naturalmente, los gobiernos estatales aludidos hicieron el papel de comparsas del gobierno de Zedillo y mantuvieron artificialmente el conflicto magisterial hasta la víspera de las elecciones federales perjudicando a millones de educandos.

La división interna de la CNTE facilitó las maniobras del gobierno federal y del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, el cual, en razón de la correlación de fuerzas desfavorable del magisterio en lucha, jugó un papel divisionista buscando el desgaste de éste. En la lógica de avanzar unilateralmente en la coyuntura, la negociación por contingentes fue aceptada nuevamente por éstos y la CNTE perdió una vez más su capacidad de centralizar la interlocución del magisterio en lucha.

En los últimos días de la jornada las negociaciones pasaron al nivel estatal. En esa dinámica, la diferente correlación local de fuerzas y la respectiva capacidad de negociación de las dirigencias, así como los diversos grados de apoyo activo y vigilante de la base trabajadora, arrojaron resultados altamente diferenciados de un estado a otro. De todos los contingentes, el de Oaxaca logró los avances más significativos, ya que se cubrieron los incrementos salariales pactados nacionalmente, a trabajadores de diversos niveles y modalidades; cuestión que fue negada en casos como el de Michoacán. Los trabajadores oaxaqueños avanzaron significativamente en la conquista de prestaciones y beneficios gremiales y so-



FOTO: CLAUDIA HERNANDEZ RAMIREZ

ciales, lo que permite la continuidad del movimiento estatal en condiciones favorables y de alta moral.

El contingente michoacano, por el contrario, fue el más castigado: no logró que se aplicara a los trabajadores de apoyo y de otros niveles educativos el aumento salarial pactado nacionalmente. Se incorporaron en la minuta de acuerdos, compromisos gubernamentales para el equipamiento de escuelas y otras acciones que corresponden realmente a partidas regulares del presupuesto anual de la Secretaría de Educación en el Estado. Se recibió, además, un revés importante al firmar su dirigencia el cierre de todas las normales que habían sido creadas en 1996 bajo la presión popular y la cobertura de la propia Sección XVIII para recibir a un número creciente de rechazados de las normales tradicionales oficiales. El régimen del Gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí, nulificó así una de las acciones de mayor congruencia del magisterio democrático frente a su compromiso con los intereses populares que enfrentaba directamente la política neoliberal en el campo de la formación de maestros.

Es conocido que, en los últimos tres sexenios, ha disminuido la matrícula en las escuelas normales a casi la mitad y que los maestros normalistas están siendo sustituidos con jóvenes improvisados del Conafe y bachilleres en la tarea educativa, a bajo costo. Ellos educan sin formación profesional de por medio, sin una relación laboral con el Estado y sin derechos sindicales.

A modo de conclusión

La CNTE ha cubierto un amplio periodo histórico en sucesivas oleadas de lucha convirtiéndose, en varias etapas de sus veinte años de vida, en la principal referencia de la lucha social en México. Las causas que le dieron vida no sólo siguen vigentes, sino que en el marco de las políticas neoliberales se han hecho cada vez más patentes y ominosas. Ello evidencia la presumible permanencia de la insurgencia magisterial si, como se advierte, con el próximo gobierno de Fox se sigue desarrollando la misma política hacia los trabajadores y hacia

el sector educativo. La existencia de la insurgencia magisterial, sin embargo, no es garantía de mejoramiento de las condiciones de ingreso y de trabajo para el gremio ni de cambios progresistas en la materia de trabajo del mismo, la cual concierne a toda la sociedad. Para avanzar en esa dirección, tendrán que operarse cambios sustantivos en las estrategias, tácticas y relaciones políticas de los grupos magisteriales que tienen la hegemonía al interior de la CNTE.

La Coordinadora ha arribado a sus veinte años de lucha en una situación de evidente desgaste. Ello coincide con el vuelco político que ha experimentado el país a partir del 2 de julio. Se puede advertir que para la CNTE ha llegado también el fin de una época: aún cuando se advierte la continuidad y la profundización del modelo económico para los próximos años, ello no resuelve la problemática que limita drásticamente a la Coordinadora.

Por otra parte, es evidente que el charrismo sindical pro hijado por el PRI durante décadas, con la debacle de éste experimentará una prueba que lo hará desaparecer como puntal corporativo del Estado y, en el mejor de los casos, será refuncionalizado bajo las nuevas condiciones de la lucha por el poder. La capacidad de Elba Esther Gordillo como líder del grupo hegemónico del SNTE y a la vez participante en uno de los principales grupos priístas, de ninguna manera tiene asegurado el control político del que disfrutó anteriormente. La crisis del PRI y su evolución determinarán en gran medida su suerte histórica y el destino de los grupos que operan en el SNTE.

La CNTE, por su parte, tiene entonces que experimentar una profunda recomposición y un serio replanteamiento de su papel y de su funcionamiento a fin de recuperar su capacidad de convocatoria y liderazgo ante el magisterio nacional y construir las condiciones necesarias para enfrentar con éxito sus tareas y avanzar en la conquista de sus demandas históricas aún insatisfechas: la recuperación salarial, la conquista de la auténtica democracia sindical y la construcción y puesta en marcha de un proyecto de educación democrático y popular que se encuentra hoy más amenazada que nunca.